

La gobernanza híbrida del Ejército de Liberación Nacional en Colombia (1973–1990): desafíos nacionales y dinámicas locales

**Hybrid Governance of the National Liberation Army in Colombia (1973–1990):
National Challenges and Local Dynamics**

Mancuso, Francesco

Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Relaciones Internacionales

Estrategia y Seguridad, Colombia

francesco.mancuso@unimilitar.edu.co

 <https://orcid.org/0000-0002-4084-5900>

García-Vargas, Luisa F.

Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Ingeniería

Colombia luisa

luisa.garciav@unimilitar.edu.co

 <https://orcid.org/0000-0002-8956-6937>

Perdomo-Flórez, Michel I.

Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Relaciones Internacionales

Estrategia y Seguridad, Colombia

est.michel.perdomo@unimilitar.edu.co

 <https://orcid.org/0009-0008-3573-2881>

Ordóñez-Figueroa, Andrea C.

Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Relaciones Internacionales

Estrategia y Seguridad, Colombia

est.andrea.ordonez@unimilitar.edu.co

 <https://orcid.org/0009-0004-5452-3242>

Ballesteros-Matiz, Justin M.

Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Relaciones Internacionales

Estrategia y Seguridad, Colombia

est.justin.ballest@unimilitar.edu.co

 <https://orcid.org/0009-0009-2611-8588>

Resumen

En este texto se presenta un análisis sobre las dinámicas económicas, sociales y fisio-
gráficas que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tuvo al momento de ingresar a un
área geográfica determinada en Colombia entre 1973 y 1990. La investigación tiene como
objetivo identificar el contexto estructural del país y las tendencias socioeconómicas,
políticas y geográficas que prolongaron el conflicto armado en los departamentos con
mayor presencia del ELN bajo el enfoque de gobernanza híbrida, por el cual se determinó
que el grupo armado configuró espacios de poder paralelos a los del Estado. A través
del método cualitativo se describieron, compararon y analizaron las características de
los departamentos en los que el grupo guerrillero desarrolló sus actividades. En este
sentido, se identificaron cuatro conductas comunes: el trabajo político adelantado por
personas cercanas a territorios con bases gestadas; el interés en las compañías extran-
jeras; la importancia de los recursos naturales explotables; y el valor estratégico de la

fisiografía de los departamentos con dificultad de acceso, previamente estudiada por el grupo guerrillero. Por lo tanto, se establece que el ELN utiliza la legitimación de las bases sociales con el fin de prolongar el conflicto en contextos de alta vulnerabilidad.

Palabras clave: ELN, gobernanza híbrida, control territorial, gobierno, bases sociales.

Abstract

This text analyzes the common dynamics that Ejército de Liberación Nacional (ELN) considered upon entering a territory between 1973 and 1990. The principal goal of the research was to identify the socioeconomic, political, and physiographic trends in the departments where the ELN maintained a significant presence. To achieve that, we use the hybrid governance approach, a key factor in determining that the armed group established parallel power structures. To achieve this, we used qualitative methodology, which describes, contrasts, compares, and analyzes the characteristics of the departments where the guerrilla group developed its activities. In this sense, we identified four common behaviors: the political work made by people close to territories with established bases, the interest in foreign companies, the importance of the natural exploitable resources, and the strategic value of previously studied physiography of the departments with difficult access. As a result, the legitimation of social bases was used by ELN to perpetuate the conflict in highly vulnerable contexts.

Keywords: ELN, hybrid governance, territorial control, government, social bases.

Recibido: 6 de septiembre de 2025 – **Aceptado:** 4 de marzo de 2026

1. Introducción

En este artículo se analizan las dinámicas económicas, sociales y fisiográficas comunes que se dieron en las áreas de influencia del ELN y que favorecieron su expansión militar y política entre 1973 y 1990. Además, se identifican las tendencias nacionales que propiciaron la agudización del conflicto y el crecimiento del grupo guerrillero en cada administración. El ELN ha sido uno de los grupos guerrilleros con más influencia al interior del país. Después de iniciar su proceso de reestructuración en 1973, ejerció gran influencia en áreas periféricas con limitada presencia institucional; esto fue posible gracias a una mezcla de responsabilidades: por un lado, las condiciones políticas nacionales lo permitieron y, por el otro, las condiciones geográficas, económicas y sociales en los territorios locales lo facilitaron.

Las condiciones políticas nacionales fueron determinadas a través del análisis de las estrategias y las medidas gubernamentales tomadas entre 1973 y 1990 para hacer frente

a los desafíos del país y, en particular, a la amenaza guerrillera representada también por el ELN. La configuración económica y geográfica de las principales áreas de influencia del grupo guerrillero se dio de manera diferenciada en cada región; sin embargo, es posible definir grandes patrones que naturalmente facilitaron el ingreso de la guerrilla y, asimismo, su manera de proceder para instaurarse como figura de autoridad.

Para ingresar a los territorios, el ELN hacía uso de la familiaridad que mantenían algunos de sus miembros con las comunidades; esto permitió difundir sus ideales de forma directa e incrementar gradualmente el escepticismo de los habitantes hacia el gobierno y las entidades estatales. Estos factores fomentaban escenarios que, en apariencia, sugieren una relación horizontal entre la población civil y el ELN, pero en realidad estaban previamente diseñados para satisfacer los intereses de la guerrilla. De esta forma, el grupo se financiaba de manera ilegal, aumentaba sus efectivos y consecuentemente intentaba conseguir «la

obtención del poder por las clases populares y la derrota de la oligarquía nacional, de las fuerzas armadas que la sostienen y de los intereses económicos, políticos y militares del imperialismo norteamericano» (Medina, 1997: 81), que era su objetivo estratégico.

El actuar del ELN es estudiado a partir del enfoque de gobernanza híbrida. Esto permite entender el funcionamiento de las regiones con baja presencia estatal y con alta influencia guerrillera. En este sentido, el grupo se estableció como máxima figura de autoridad, reemplazando la institucionalidad y supliendo necesidades comunitarias como seguridad, salud, representación, infraestructura y desarrollo, debido a la legitimidad otorgada y al poder coercitivo que tenían al estar alzados en armas. Esto prolongó el conflicto y aumentó la violencia cuando se incrementó la actividad paramilitar a partir de 1986.

Entre 1973 y 1990, el grupo guerrillero ingresó a territorios del Magdalena Medio, nororiente y suroccidente con diversos frentes de guerra que se encontraban en constante

expansión. Estas regiones compartían condiciones circunstanciales basadas en el contexto social, político y económico del país, aunque se materializaran de forma diferenciada en cada una de ellas. Hasta 1990, el grupo guerrillero articuló una gobernanza híbrida en varias regiones; sin embargo, las divisiones internas y el cambio en la dinámica de la guerra por el aumento de la actividad paramilitar y el fortalecimiento de las fuerzas militares, redujeron su poder.

Analizar las condiciones de los territorios más relevantes a los que ingresó el ELN permite identificar la relación de los contextos departamentales con las zonas en las que se concentró el conflicto armado. Esto permite crear escenarios propicios para futuros procesos de paz en los que se propongan soluciones diferenciadas y aplicables a los entornos específicos, que favorezcan el fortalecimiento de las economías locales, la construcción de dinámicas particulares entre entidades estatales y la comunidad, y la prevención del surgimiento de nuevos actores armados.

2. Marco teórico: gobernanza híbrida

La gobernanza es definida por Keohane y Nye (2000: 202) como «los procesos y las instituciones formales e informales que orientan y regulan las actividades de un grupo. El gobierno es el subconjunto que actúa con autoridad y establece obligaciones formales», y por esta razón busca ejercer las buenas prácticas generando y proveyendo bienes y servicios, públicos y privados. Sin embargo, la gobernanza no es aplicada únicamente por el gobierno y las instituciones internacionales (Keohane y Nye, 2000; López y Fuerte, 2020); es un ejercicio de interdependencia entre actores que tienen la capacidad de decidir, ejecutar y evaluar decisiones que inciden en la población (Whittingham, 2011).

Naturalmente, «la gobernanza híbrida reasigna autoridad a grupos con poder territorial, económico o armado» (López y Fuerte, 2020: 4). En países latinoamericanos existen territorios—en su mayoría locales o periféricos— en los que el Estado no cuenta con la capacidad suficiente para garantizar

el cumplimiento del Estado de derecho, así la gobernanza híbrida se configura como una adecuación institucional en la que se llevan a cabo prácticas legales e ilegales que articula intereses y actores regulares o irregulares, en torno al poder que se ejerce en procesos sociales, políticos y económicos (López y Fuerte, 2020).

Debido a la interdependencia del ejercicio, en algunos territorios se ejerce una gobernanza híbrida que responde a la combinación de dinámicas históricas con instituciones modernas para la construcción del Estado. A pesar de que en Colombia esta práctica no se encuentra legalmente constituida, existen casos en los que se presenta una superposición de autoridades debido a la existencia del Estado como máxima fuente de poder, y a la existencia de una autoridad social representada en líderes comunitarios que tienen arraigo y son reconocidos por la comunidad como referentes.

La gobernanza híbrida no es un fenómeno aislado, también fue estudiado en Somalia,

Tanzania y Kenia, en donde además de una figura de autoridad tradicional existen otras —principalmente en áreas periféricas— que, en algunos casos, fortalecen el papel del Estado al adelantar procesos de paz con prácticas alternativas, y en otros lo debilitan dejando en evidencia su incapacidad para ejercer las funciones esenciales del monopolio legítimo del uso de la fuerza y la capacidad de hacer cumplir las decisiones políticas (Boege et al., 2008; Risse y Lehmkuhl, 2006).

En Colombia, los grupos armados establecen zonas de dominio en las que mantienen un alto control y presencia (FIP, 2024). Esto no solo transforma las dinámicas de poder existentes, sino que también instaaura una figura de autoridad primaria en territorios donde la institucionalidad es débil o nula. No obstante, y sin desconocer que son actores armados inherentemente coercitivos en su interés de ejercer la gobernanza, cumplen con la provisión de bienes tangibles e intangibles, como la reducción de la violencia y la prestación de servicios públicos, que financian a través de las extorsiones

o secuestros que realizan al interior de la comunidad.

La existencia y las dinámicas de control del ELN en el Magdalena Medio, nororiente, suroccidente y el Caribe colombiano pueden catalogarse como gobernanza híbrida, debido a que, en primera instancia, su llegada a estos departamentos significó para los habitantes «la posibilidad de denunciar no solo las condiciones de marginamiento en las que se hallaban, sino el reconocimiento de su existencia» (CNMH, 2018). Esto incidió en el imaginario de una población que había sido históricamente excluida por el Estado. La llegada del ELN abrió la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisiones, por lo que se constituyeron marcos legales entre los habitantes y la organización armada que actuaba como máxima figura de autoridad en ausencia de una justicia institucional efectiva. Asimismo, la guerrilla construyó con los habitantes lo que ellos denominaban una «relación política» en la que se orientaba a las Juntas de Acción Comunal (JAC) a continuar los procesos organizativos

para conseguir reivindicaciones sociales (Forero y Amaya, 2021).

Al reconocer la multiplicidad de autoridades existentes en determinada región, la gobernanza híbrida permite identificar las razones por las cuales el ELN logró establecer zonas de influencia en las que contaba con un grado de legitimidad, disputando el poder con la institucionalidad a través de la provisión de bienes y servicios necesarios. Además de esto, desafía la noción tradicional del ejercicio de poder al interior de un Estado, debido a que demuestra que el ELN en Colombia se configuró como un actor de gobernanza de facto que tenía capacidad de influir de manera particular en cada región.

3. Metodología

Esta investigación se enmarca en una metodología cualitativa, en cuanto existe la necesidad de abordar la reconstrucción y la expansión del ELN entre 1973 y 1990, como un fenómeno que involucra el estudio de aspectos sociales, políticos y económicos.

A lo largo de este documento, también se hace un análisis de datos cuantitativos que permite comprender la expansión y el impacto del grupo armado en los territorios estudiados. La integración de estos elementos hace posible triangular la información para presentar resultados a partir de evidencia cualitativa e interpretación de datos cuantitativos, lo que contribuye a la identificación de patrones de crecimiento en el tiempo y, a su vez, a comprender las percepciones y condiciones sociales que respaldan estos procesos.

Inicialmente, se realizó una línea del tiempo acerca de la trayectoria del ELN. Para efectos de este artículo, se tomaron en cuenta los años comprendidos entre 1973 y 1990. Después de identificar los departamentos a los que el grupo armado ingresó durante este período, se caracterizó cada uno de ellos utilizando tres recursos principales.

En primer lugar, la revisión de la literatura permitió establecer los antecedentes históricos que fijaron la orientación

política de la mayoría de los habitantes de cada departamento.

En segundo lugar, se hizo la recopilación y el análisis de datos de los Censos Nacionales de Población y Vivienda de 1973 y 1985, expedidos por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), para identificar la actividad económica predominante y la cantidad de habitantes por departamento, discriminarlos por edad, sexo, mayor logro educativo alcanzado y ocupación. Lo anterior, con el fin de determinar la relación existente entre la calidad de vida, el potencial económico de cada departamento y el asentamiento del ELN como figura de autoridad.

Finalmente, a través de la recolección de datos sobre la hidrografía, el relieve y la división política de cada departamento, se construyeron documentos que permitieron precisar la importancia geográfica de los territorios y señalar las tendencias que el grupo guerrillero consideró al ingresar a estos. Entre ellas, se destacan zonas montañosas que podían favorecer la creación de

puntos de retaguardia para la organización y la presencia de ríos que facilitaban las comunicaciones entre las diferentes estructuras del grupo guerrillero o favorecían acciones de escape en caso de persecución estatal.

En base a la información obtenida por medio de estos tres recursos, se seleccionaron las zonas con más importancia para el ELN. Los departamentos fueron agrupados en subregiones para conseguir una mayor delimitación de las áreas geográficas que comparten características económicas, sociales y físicas, y un mejor rango de análisis para identificar fácilmente las áreas de influencia del grupo armado. Las dinámicas establecidas fueron identificadas por la relación causal existente entre las modalidades de trabajo presentes en cada subregión y la consolidación de las ideas políticas de la población que tenía raíces de tendencia liberal.

4. Origen estructural de las dinámicas

El territorio colombiano, al ser tan extenso, cuenta con una gran diversidad no solo a nivel

fisiográfico, sino a nivel social, económico y cultural, entre otros. Esto ha permitido que en Colombia existan realidades muy diferentes de manera simultánea. En el caso del conflicto armado, existen lugares que tienen mayor propensión a la intervención de guerrillas. Con el ELN se identifica que hay ciertas características sociales y económicas que están enraizadas en debilidades estructurales del Estado y que hacen que un territorio sea considerado fértil para la intervención de este grupo armado. Además, se identifican características fisiográficas que son fundamentales para su movilidad y supervivencia.

Tal como lo plantea Jerónimo Ríos (2016) al integrar los postulados de varios académicos que tratan el conflicto en Colombia, los factores económicos, fisiográficos y sociales son determinantes para comprender las dinámicas del conflicto. Por ello, a continuación, se encuentra una contextualización histórica de aquellos territorios que cuentan con mayor presencia elena, que permite trazar el origen de estas dinámicas

que fueron aprovechadas por el ELN en su proyecto insurreccional.

En Arauca se vivía una condición de pobreza extrema a causa de los procesos de colonización, mal planeados, que se llevaron a cabo entre los años 1962 y 1970 (CNAI, 2012). Atendiendo a la Reforma Agraria propuesta en 1961, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria (INCORA) fue el encargado de adelantar el proceso de colonización en 1962. Sin embargo, la cantidad de personas que ingresaron al departamento buscando garantías dobló en número a lo que se había estipulado, pasando de 2.000 a aproximadamente 5.000 familias, para las que únicamente había 200.000 hectáreas de tierra (Plazas, 2017). Con una planeación improvisada desde el principio, el Instituto incumplió con la construcción de vías de comunicación y la adecuada distribución de tierras, dificultando el desarrollo económico departamental (CNAI, 2012).

Por otro lado, para 1959 se implementó en Bolívar la figura de Zona de Reserva Forestal

«en un 73 % de los territorios del sur de Bolívar, lo cual impidió a los pobladores el desarrollo de cultivos de manera legal y el acceso a títulos de propiedad» (Forero y Amaya, 2021: 199), aumentando la pobreza existente y consolidando las economías ilegales asociadas al cultivo de marihuana, coca y minería informal (Fonseca et al., 2005). Asimismo, el departamento del Cesar no fue abandonado por el Estado debido a la cercanía del presidente López Pumarejo (1934–1938, 1942–1945) con las élites del departamento; sin embargo, el deterioro de una economía que había sido exitosa gracias a la bonanza algodonera generó problemas de tenencia de tierra entre colonos y terratenientes, quienes, además, habían destinado toda su tierra al riego y se habían vuelto dependientes de la compra de alimentos a otros departamentos (Barrera, 2014).

En general, la historia de Colombia se ha desarrollado en un contexto marcado por la violencia, la insatisfacción de las demandas sociales y la inseguridad (Peco y Peral, 2006). Estos factores configuraron

lentamente un escenario propicio para la aparición de organizaciones que surgieron con el objetivo de impulsar un cambio mediante la lucha armada (Grupo de Memoria Histórica, 2013). En este sentido, la figura del Frente Nacional (1958–1974), instaurada para atender las consecuencias de la época de La Violencia (Ministerio de Cultura, 2016), no logró el efecto esperado. Ello se debió, entre otros aspectos, a la identificación de fuerzas políticas y sociales alternativas, lo que derivó en la construcción del concepto de «enemigo interno» que debía ser reprimido. Esta situación favoreció la radicalización de los movimientos de izquierda en algunas universidades y el resurgimiento de organizaciones campesinas lideradas por corrientes comunistas (Grupo de Memoria Histórica, 2013; Comisión de la Verdad, 2022a; Ministerio de Cultura, 2016).

Bajo esta lógica, en departamentos con una fuerte tradición revolucionaria, como Santander, donde la presencia de las guerrillas liberales —en particular la guiada por

Rangel— era significativa, el ELN halló el entorno propicio para iniciar su proyecto y, en 1964, hizo su primera aparición en San Vicente de Chucurí, municipio ubicado en la región del Magdalena Medio. Además de las características socioeconómicas de la población santandereana, hay que destacar las capacidades estratégicas que otorgaba el río Magdalena y la importancia que implicaba que este departamento fuera, como afirma Ríos Sierra (2017a), el nervio central de la industria petrolífera.

Desde su fundación, el ELN construyó un discurso alrededor de la explotación de hidrocarburos en el país. Este fue actualizándose conforme cambiaba la coyuntura, pero mantuvo la premisa de lograr cambios en la política nacional petrolera, promoviendo la idea de que la extracción debía contribuir al desarrollo de las regiones (FIP, 2015) y no responder a intereses de compañías extranjeras que en el pasado habían favorecido la explotación de recursos. Este contexto histórico, aunque no está dentro del período de análisis, puede ilustrarse con

la firma del contrato Chaux-Folson durante el gobierno de Enrique Olaya Herrera, en el cual se establecieron condiciones favorables para las empresas y escenarios precarios para los habitantes, trabajadores y las tierras de la región del Catatumbo.

Como señalan Vega et al. (2009), «en 1936 se produjo la última venta de la Concesión Barco, la cual quedó por partes iguales en poder de Mobil y Texaco». De manera similar, en la región de Montes de María, las compañías extranjeras en los años 20 eran: «1). Latin American Petroleum Corporation - (El Carmen de Bolívar, Zambrano y San Jacinto). 2). Bataache Petroleum - Angloholandesa (Toluviejo). 3). Colombian Sugar Company (Sincerín)» (FUNCUDE, 2020:25). En estos territorios se establecieron economías de enclave, las cuales fueron la base para la posterior respuesta social, materializada en la década de 1970 con el auge del trabajo sindical que se había adelantado desde el inicio de las operaciones de las compañías norteamericanas (Vega et al., 2009; FUNCUDE, 2020).

Debido a las condiciones internas que atravesaba el país, el ELN pudo expandirse de forma gradual durante nueve años «en un área de operaciones conformada por Santander, Antioquia, sur del Cesar y sur de Bolívar... así hasta 1973, el ELN desde Simacota tuvo un crecimiento lento pero continuo. Para 1973 ya tenía 270 hombres en sus filas» (Vélez, 2001: 20). Esto no es coincidencia, sino producto de las condiciones históricas particulares ya mencionadas que fueron aprovechadas por la organización armada para instaurarse como autoridad.

5. Configuración del Contexto Nacional

En 1973, la operación Anorí diezmó al grupo guerrillero que para ese momento ya había tenido reveses militares con importantes bajas como la de Camilo Torres, y debilidades en la consolidación del músculo político que quedaron en evidencia cuando los gremios y sectores de la población del noreste antioqueño comenzaron a «exigirle al gobierno nacional una presencia enérgica de sus fuerzas armadas con el objeto de no

permitir el asentamiento y permanencia de la guerrilla en la región» (Medina, s.f.: 182). La operación Anorí significó para el grupo guerrillero su extinción parcial por las bajas que lo redujeron a 70 unidades; no obstante, los sobrevivientes, lejos de rendirse, se reorganizaron, sentando las bases para el replanteamiento político-militar del ELN.

Durante la etapa de crisis del ELN, asumió la presidencia Alfonso López Michelsen (1974–1978), en quien se depositaron expectativas de cambio, dado que fue el primer presidente después del Frente Nacional. Su gobierno buscó continuar la urbanización del país por medio de una reforma tributaria, incluir en la escena política a actores de diferentes corrientes y responder a las nuevas necesidades. A pesar de los esfuerzos, durante su administración, Michelsen tuvo que enfrentar una crisis económica que le dificultó responder de manera satisfactoria a las demandas de los movimientos sociales; esta situación degeneró en paros cívicos que eran reprimidos con violencia y con la

implementación de estados de sitio (Medina, s. f.; Comisión de la Verdad, 2022a).

En estos años, el ELN aún no se recuperaba de lo ocurrido en Anorí, por lo que, si bien realizó algunos ataques militares y tomas en las diferentes regiones en las que quedaron unidades (Medina, s.f.), no tuvo una gran incidencia a nivel nacional comparada con la del M-19 o el EPL. Adicionalmente, el golpe a las unidades urbanas denominado «el febrerazo» en 1977 terminó de debilitar al grupo y lo condujo a la Primera Reunión de responsables que tuvo lugar en 1978, con el fin de buscar una solución estructural para solucionar la profunda crisis.

En 1978 llega a la presidencia Julio César Turbay Ayala, quien establece un gobierno de tinte autoritario cuando implanta el Estatuto de Seguridad a través del Decreto 1923 de 1978, «por el cual se dictan normas para la protección de la vida, honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados» (Decreto 1923, 1978). Este decreto fue utilizado como medida para enfrentar

a los grupos armados que aumentaron su beligerancia, a los movimientos sociales que se expresaban a través de la protesta y a quienes realizaban críticas contra el sistema. Con esta medida, el presidente restringió las libertades fundamentales, controló la difusión de la información, otorgó autonomía a las fuerzas militares para realizar Consejos Verbales de Guerra, entre otras (Comisión de la Verdad, 2022a).

En este mismo contexto, el gobierno enfrentaba una reactivación de la guerrilla, que era producto de «dificultades económicas y un malestar social de difícil gobernabilidad» (Ríos Sierra, 2017a: 51). Ante esta crisis, Turbay Ayala propone la Ley 37 de 1981, a través de la cual estableció «amnistía, indulto y tratamientos penales especiales» para los miembros de grupos armados que hubieren cometido crímenes políticos y decidieran acogerse a esta ley. No obstante, fue vista por las guerrillas como una invitación a la rendición (Ríos Sierra, 2017a), propuesta que era especialmente inviable por la coyuntura que

atravesaba el país, lo que instó al ELN a mantenerse en armas.

Conforme el Estado continuaba debilitando la relación con los pobladores, el ELN atravesó un proceso de reestructuración que fue clave para su subsecuente expansión. Este tuvo como primer fin superar las diferencias políticas internas volviendo a las bases primarias de su formación con la creación de la Dirección Nacional Provisional, la cual también buscaba la centralización organizativa, política y económica para generar un cambio en la relación con las masas, respaldado en la creación de varias comisiones que influenciaron a la población campesina, y llevando a cabo ataques militares que elevaron la moral del grupo y le permitieron expandirse en la región nororiental. En esta región se fundó el frente Domingo Laín (1980), el cual se convirtió en ejemplo para la organización por su rápido crecimiento, capacidad para financiarse y para incidir en la vida territorial (Aponte, 2021).

En el año 1982 asume la presidencia Belisario Betancur, quien comprendió las causas objetivas del conflicto y buscó la paz con los grupos alzados en armas mediante negociaciones. De esta forma promovió la descentralización y buscó la inserción de las guerrillas en el escenario político (Comisión de la Verdad, 2022a). Sin embargo, su ideal fue criticado por las élites tradicionales y rechazado por las fuerzas militares, debido a que mantenían su lealtad al Estatuto de Seguridad implantado en la administración anterior (CAJAR, 2015).

Mientras se llevaban a cabo las negociaciones de paz, se dieron de manera simultánea tres fenómenos: la aparición y expansión del narcotráfico, la oposición de las fuerzas armadas y las primeras manifestaciones oficiales de paramilitarismo (Ríos Sierra, 2017a). La configuración de estos factores dificultó los avances y terminó por exigir cambios en la dinámica de enfrentamiento del conflicto. Adicionalmente, la proliferación de grupos paramilitares sienta la base para un aumento de la violencia en los

territorios y es el germen de la denominada «guerra sucia» que se desarrolla en los años siguientes.

Entre 1982 y 1986, el ELN terminó de reconstruirse e inició un proceso de rápida pero diferenciada inmersión en varios territorios del país, que le permitieron obtener financiación, expandir su trabajo político y ampliar sus zonas de influencia. Esta expansión se favoreció con la creación de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) que, más allá de las acciones de facto, tuvo como propósito per se demostrar que las negociaciones con el gobierno se habían agotado y que su intención era mantenerse en pie de guerra. Sin embargo, la guerrilla tenía problemas internos al ejecutar las decisiones tomadas en las reuniones de la CNG, debido a que —por su naturaleza organizativa— no había un mando general que los mantuviera bajo una misma línea. Además, la existencia de la Dirección Nacional y el Comando Central era una instancia simbólica de la que los nuevos frentes preferían mantenerse apartados para no perder su autonomía (Aponte, 2021).

El gobierno de Virgilio Barco (1986–1990) se propone como solución para el conflicto armado utilizar una estrategia híbrida de las dos administraciones anteriores. Por un lado, reconoció la importancia de promover reformas sociales que subsanaran las causas estructurales del conflicto; por el otro, reconoció que la confrontación armada era la única manera de enfrentar a los grupos guerrilleros. Así, durante los dos primeros años de su mandato, el objetivo fue recuperar las bases sociales y excluir a las guerrillas de los escenarios políticos (Bejarano, 1990). Su propuesta de negociación nuevamente fue reconocida como una invitación a la rendición; esta exigía el cese al fuego unilateral y unas reformas que no debían estar atadas a las negociaciones con grupos armados (Ríos Sierra, 2017a).

Sin embargo, su administración enfrentó una crisis de legitimidad por la dinámica de «guerra sucia» que dejó en evidencia los lazos de grupos paramilitares con los miembros de las fuerzas militares, el recrudecimiento del conflicto armado por las masacres colectivas

y los asesinatos selectivos (Comisión de la Verdad, 2022a). Como consecuencia de estos problemas, el gobierno tuvo que abrir negociaciones que culminaron en acuerdos de paz con el M-19 y el EPL. Durante este período, el ELN experimentó un gran crecimiento y, según fuentes oficiales, «pasó de tener 1.200 hombres en 1987 a 2.300 en 1990 y pasó de 14 a 23 frentes rurales, consolidando de esta manera sus cinco frentes de guerra» (Verdad Abierta, 2008).

Este crecimiento, tanto en hombres como en estructuras, fue favorecido por las acciones contra el oleoducto Caño Limón-Coveñas, la fusión con los miembros de la guerrilla MIR Patria Libre y el trabajo político con la población, tanto urbana como rural. Sin embargo, durante el II congreso realizado en 1989, quedó en evidencia la ruptura interna del grupo y la poca homogeneización tanto ideológica como política que existía en los frentes, ya que cada uno tomaba las decisiones que consideraba adecuadas según el contexto en el que operaba (Aponte, 2021).

6. Configuración de las dinámicas locales

6.1 Dinámicas sociales

Como respuesta a las situaciones que se vivían en cada departamento, se gestaron sindicatos y movimientos sociales que reclamaban el reconocimiento del Estado para la atención de sus necesidades por medio de paros cívicos, de los cuales Arauca fue protagonista en 1972 y 1975 bajo el amparo de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), buscando la reivindicación campesina. De allí, lentamente, surgieron corrientes radicales que consideraban que el cambio se lograba a través de las armas, lo que dio origen al Frente Domingo Laín, finalizando la década de 1970 (Medina, 2014). Sin embargo, la relación del grupo guerrillero con los habitantes de otras regiones, como el sur de Bolívar, solo mejora durante la primera mitad de la década de 1980 cuando la organización trasciende en el trabajo político y no lo utiliza únicamente para coaccionar el apoyo logístico de su proyecto (Forero y Amaya, 2021).

En territorios como el sur de Bolívar, el Catatumbo y zonas rurales del suroccidente, la institucionalidad establecida no era efectiva debido a que no existía una figura de autoridad que se hiciera cargo de garantizar seguridad y justicia para los habitantes (CNMH, 2018; Forero y Amaya, 2021). Cuando el ELN lo nota, transforma su trabajo político para llenar el vacío de legitimidad que deja el Estado y comienza a construir una relación cercana con la población. En esta, reconoce la importancia de los territorios por su mera existencia (CNMH, 2018) y las necesidades de cada uno. Así, el grupo guerrillero insta a los pobladores a organizarse en torno a las causas para exigirle al gobierno una respuesta adecuada, y organiza un trabajo conjunto en el que se crean sistemas de justicia y esquemas de seguridad en los que ejerce el papel protagónico, puesto que, al ser el actor armado, se encarga de hacer cumplir las penas establecidas bajo la aprobación de la población (CNMH, 2018; Aponte, 2021), que consideraba haber construido una relación política con la organización armada

al poder manifestar su inconformidad con alguna medida tomada.

Aunque el trabajo político realizado durante la primera mitad de la década de 1980 permitió al grupo armado expandirse por el territorio, su credibilidad entre los habitantes comenzó a disminuir a partir de 1986. Este declive se debió a que el rápido crecimiento de la organización los llevó a relegar los procesos de formación política interna, y los nuevos mandos no mostraban interés en construir relaciones de confianza con las comunidades. En Arauca, los líderes establecidos en la segunda mitad de los 80 intensificaron el reclutamiento de jóvenes y profesores de escuelas, forzaron a los jueces a renunciar mediante amenazas y desplazamientos para impedir investigaciones en su contra y castigarían a quienes tuvieran cercanía con miembros de la Fuerza Pública (Larratt-Smith, 2021).

En el suroccidente del país, los habitantes rechazaban los enfrentamientos entre el ELN y las FARC por el control territorial,

ya que, aunque inicialmente legitimaron la presencia del ELN como un actor regulador de las relaciones sociales, los ataques y confrontaciones entre ambas guerrillas afectaban a las comunidades, poniendo en riesgo sus vidas al ser considerados colaboradores (Plazas, 2016; Amaya, 2021).

Finalmente, el ELN llegó al Pacífico con el objetivo de establecer una zona de retaguardia que le permitiera contar con corredores de movilidad para replegarse, reabastecerse y refugiarse, debido al aumento de la actividad paramilitar en zonas que históricamente habían pertenecido al grupo. Sin embargo, al carecer de un plan adecuado de inserción en el territorio, no logró establecer un vínculo sólido con la comunidad, que, además de tener otras formas de resistencia social, no se sentía representada por la organización (Aponte y Gonzales, 2021).

6.2 Dinámicas económicas

Retomando el discurso sobre la nacionalización del petróleo, el accionar del ELN iba dirigido a conseguir fuentes de financiación

a través de la extorsión a las compañías, la legitimación de la población por medio del apoyo a sus causas sociales y, consecuentemente, la adición a sus filas por parte de quienes se radicalizaron (FUCUDE, 2020). Además, la presencia de industrias extranjeras y la poca recaída de inversiones en los territorios favorecieron el trabajo político del grupo guerrillero, poniendo aún más en entredicho la legitimidad estatal.

Así, cuando en 1983 la compañía Occidental Petroleum descubre los yacimientos en Caño Limón y se inicia la construcción del oleoducto por parte de la empresa alemana Mannesmann, el ELN ya tenía control sobre los departamentos que este atravesaría: Arauca, Norte de Santander, Cesar, Atlántico, Bolívar y Sucre, en donde se compartían sentimientos de desconfianza por las instituciones debido al abandono de estas. En estas zonas, el grupo guerrillero había obtenido los resultados esperados de su trabajo político; esta situación permitió que el ELN lograra financiaciones a través de extorsiones y secuestros que realizaron

en todos los departamentos: «la expansión del ELN a partir de ese momento se financió gracias al pago millonario del rescate de cuatro ingenieros de la empresa alemana Mannesmann» (Echandía, 2013: 7). Como señalan fuentes oficiales, «en el caso de los pagos realizados por la empresa alemana Mannesmann, encargada de construir el oleoducto Caño Limón – Coveñas, se han estimado cálculos que van desde los 300 millones de dólares» (FIP, 2015: 10).

Una situación similar fue la vivida en el Oleoducto Transandino, ubicado en el suroccidente del país y que comprende los departamentos de Putumayo y Nariño. Su construcción finalizó dos décadas antes de la llegada del grupo guerrillero a la región, a finales de la década de 1980. Para el ELN, Nariño no era visto como un escenario de guerra, sino como una zona de retaguardia. Gracias al bajo nivel de desarrollo económico, al escaso desarrollo industrial y a su ubicación periférica, el grupo guerrillero utilizaba el territorio para descansar, entrenar combatientes y realizar trabajo político

(Amaya, 2021). Sin embargo, cuando los elenos se percataron de la importancia estratégica que podían obtener en términos de frontera internacional e hidrocarburos si controlaban la zona, comenzaron a financiarse a través de la economía petrolera mediante el Oleoducto Transandino y los yacimientos de oro existentes en el departamento (Millán, 2011).

El grupo guerrillero también realizaba ataques a los oleoductos que ya estaban en funcionamiento para demostrar su solidez y, de esta manera, ejercer presión sobre las compañías a las que extorsionaba. Asimismo, buscaba mostrarse ante la población como una organización comprometida con las necesidades de la comunidad, ratificando su discurso de rechazo hacia las multinacionales por su modelo de explotación e involucrándose ilegalmente en la vida política de los municipios, con el propósito de establecer relaciones de reciprocidad con quienes querían mantenerse en el poder a cambio de regalías derivadas de la explotación petrolera (FIP, 2015).

Es absolutamente pertinente mencionar que estas dinámicas se extrapolan y llegan a la actualidad no en vano; Jerónimo Ríos afirma en 2017 (b) para el World Economic Forum que el ELN es «el actor hegemónico del departamento de Arauca y de algunos enclaves de los ya mencionados Antioquia, Bolívar y Norte de Santander». Además, justifica esto detrás de las dinámicas económicas ya mencionadas, es decir, hace referencia a sus fuentes de financiamiento que «provienen de la minería ilegal, la extorsión a las empresas extractivas, el narcotráfico y el contrabando», características que no solo han prevalecido a través del tiempo, sino que se han convertido en factores determinantes para que este perdure.

6.3 Dinámicas fisiográficas

El ELN ingresó a regiones que contribuyeron a fortalecer su estabilidad interna durante la etapa de reestructuración, permitiendo que el grupo fuera nuevamente percibido como un actor central en el conflicto interno. En territorios como Arauca, aseguró no solo la legitimidad del proyecto político, sino

también ventajas estratégicas derivadas de la geografía: al occidente se encuentra rodeado por la cordillera oriental que alcanza elevaciones de 5.380 metros (Gobernación de Arauca, 2016), y al sur limita con el río Casanare, que lo separa de este departamento. Además, logró internacionalizar el conflicto con el ataque a Cutufi —ubicado en Apure, Venezuela—, ocurrido en 1983.

Algo similar ocurrió en el suroccidente colombiano, donde el ELN ingresó en 1983 con el Frente Manuel Vásquez Castaño (Amaya, 2021). En Cauca, la presencia de la cordillera occidental —que atraviesa el departamento de suroeste a noreste— y de la cordillera Central —de sur a norte en el oriente— (Ministerio de Trabajo, s. f.) configuraba un relieve abrupto que dificultaba el acceso y mantenía aislada la región. El grupo también ingresó a Nariño, territorio con riqueza mineral, limítrofe con Ecuador, con un corredor estratégico en el que «se desarrollan economías de contrabando, tráfico de armas y narcotráfico, pues atraviesan la carretera Panamericana, que comunica con

el Ecuador, y la vía alterna que comunica Ipiales y Tumaco hacia el océano Pacífico» (Comisión de la Verdad, 2022b: 94).

En el sur de Bolívar, región conformada por 16 municipios, el ELN consolidó el Frente Luis José Solano Sepúlveda. El territorio, ubicado al costado occidental del río Magdalena y en inmediaciones de la Serranía de San Lucas, incluye además las serranías de Santo Domingo y Montecristo, parte de la cordillera Central. Su topografía accidentada complica el acceso y la mantiene aislada incluso de la capital departamental. Por ejemplo, Barranco de Loba, municipio que se encuentra ubicado al norte de la subregión, dista de Cartagena en aproximadamente 400 km; sin embargo, Cantagallo está a una distancia de 36,3 km o a una hora de distancia de Santander, de donde provenían los simpatizantes del ELN que adelantaron el trabajo político en Bolívar (Forero y Amaya, 2021).

El ELN se estableció en el sur de Bolívar no solo por la relación cercana que sostenía con los ciudadanos, sino también por el prospecto

expansivo que le ofrecía la zona, al estar conectada naturalmente con las «zonas bananeras del Urabá chocoano y antioqueño, en donde los caudalosos ríos desembocan en los océanos Atlántico y Pacífico, y hacia el oriente cruzando el país conecta a Urabá con la Serranía del Perijá y la hermana República Bolivariana» (Rodríguez, 2005: 136).

Un fenómeno similar se presentó en el Catatumbo, Norte de Santander, con una dinámica particular debido a la ubicación geográfica del departamento, a los habitantes y a los objetivos del ELN al establecerse en la región. Sin embargo, los resultados fueron semejantes debido a la influencia alcanzada y los logros estratégicos. Catatumbo comprende 10 municipios del departamento y dos resguardos indígenas habitados por el pueblo Barí, históricamente afectado por abusos del Estado, de compañías petroleras privadas que llegaron desde el siglo XX y de colonos atraídos por el «oro negro» (CNMH, 2018).

Esta región tiene una importancia estratégica que el ELN no había reconocido al

momento de ingresar al departamento. Según la Fundación Ideas para la Paz (2013), el grupo guerrillero únicamente quería establecer un puente de comunicación con Arauca y acercarse a la frontera con Venezuela. Sin embargo, con la economía ilícita presente en el departamento, la legitimación de los habitantes, la dificultad de acceso al territorio por las características del suelo y la posibilidad de añadir territorio fronterizo a su dominio, el grupo guerrillero estableció allí una zona de retaguardia en donde estaba ubicado el centro de operaciones del «Cura Pérez» (FIP, 2013); estrategia que le permitió continuar con los ataques al Oleoducto Caño Limón Coveñas, en los municipios que este atravesaba.

7. Resultados del análisis de los desafíos nacionales y las dinámicas locales en las zonas de influencia del ELN

7.1. El Estado como actor que contribuye a la extensión del conflicto armado

La escasa presencia estatal en los territorios periféricos, resultado de la falta de capacidad

e interés institucional, permitió que en la primera mitad del siglo XX las empresas extranjeras ejercieran una gran influencia en las zonas donde se establecían. Esto generó acaparamiento de tierras y precarias condiciones laborales que afectaron el poder adquisitivo de los trabajadores y, en consecuencia, su calidad de vida. Bajo este contexto, el ELN cooptó los sindicatos y movimientos sociales que surgieron en respuesta, lo cual facilitó su auge durante la segunda mitad del siglo y le permitió instaurar una gobernanza híbrida en la que brindaba seguridad y se erigía como autoridad.

Para los habitantes, este fue su primer contacto con una forma de autoridad que se alineaba con sus intereses. Por ello, la aceptación del ELN en los municipios durante los últimos años de la década de 1970 y los primeros de la de 1980 fue casi inmediata. La presencia del grupo en los municipios significó para ellos el establecimiento directo del orden social y de una justicia eficiente que se acordó entre ambas partes. Sin embargo, aunque estas dinámicas fueron interpretadas como

justas por los pobladores, no debe pasarse por alto que el actor armado tiene un poder coercitivo que condiciona la reacción de la fracción de la población que no estaba de acuerdo con las dinámicas de la guerrilla. La población disidente se vio obligada a convivir con las decisiones de la guerrilla, lo que generó tensiones y efectos negativos con la llegada del paramilitarismo. Los habitantes quedaron atrapados entre dos riesgos: ser señalados como colaboradores del nuevo actor armado o ser considerados traidores por el ELN.

El contexto nacional permitió el crecimiento de los grupos armados al interior del país. La centralización administrativa y las medidas represivas, como la implementación del estatuto de seguridad para enfrentar las problemáticas sociales, aumentaron el espacio existente entre el Estado como máxima figura de autoridad y la población que demandaba un cambio estructural para superar la desigualdad, la exclusión y la precariedad en las áreas periféricas. Este escenario permitió que las guerrillas expandieran su influencia

en zonas rurales del territorio, conforme los gobiernos aumentaban la represión. El ELN reestructuró su organización transformando el trabajo de masas para ocupar los vacíos de poder existentes, recuperar relevancia en territorios históricamente marginados y consolidarse como un actor central del conflicto armado.

7.2. El cambio de estrategia del ELN: factor clave para la reestructuración

Después de la Operación Anorí, el ELN comprendió que el foquismo no era una teoría aplicable para lograr su objetivo debido a que no consideraba el trabajo de las masas. La estrategia de asignar a los campesinos únicamente tareas de apoyo logístico y de seguridad, sumada al poco interés en formar políticamente tanto a los combatientes como a los pobladores (Medina, s. f), condujo al grupo a una de las mayores crisis de su historia. En este contexto, después de 1973, la guerrilla modificó su método de expansión territorial, orientándolo hacia la construcción de relaciones de confianza con los habitantes. El propósito era que las

comunidades percibieran al ELN como un actor con el cual podían establecer vínculos horizontales de colaboración, basados en el reconocimiento mutuo y la cercanía social. Sin embargo, esta lógica se diluyó cuando el grupo logró consolidar el control de los territorios, aumentó en número y tuvo que enfrentar el avance de las acciones paramilitares a partir de 1986.

El trabajo político desarrollado por el ELN se basó en el estudio de las condiciones económicas y sociales en términos de orientación política de los habitantes y conexiones al interior de las regiones. Por un lado, para los elenos fue esencial encontrar lugares que tuvieran algún potencial económico del cual pudieran obtener financiación; generalmente, allí se establecían las compañías extranjeras que sometían a los trabajadores locales a las dinámicas de enclave. En este contexto, la legitimación de un proyecto que pretendía cambiar las condiciones en la relación explotador-explotado podía conseguirse fácilmente, además de otorgarle nuevos combatientes. De igual manera, conocer las ideas políticas

de los pobladores y los motivos de sus demandas colectivas era de vital importancia para construir una base sólida de activismo político que les garantizara una existencia prolongada en la región, que iniciaba con la articulación de un líder comunitario o una persona reconocida en la comunidad en las filas del ELN. Dicho líder actuaba como puente, facilitando la socialización de postulados y convocando progresivamente a miembros de la comunidad.

7.3. El petróleo y la fisiografía: aspectos clave para la expansión del ELN en el territorio

Después de la reestructuración, el ELN hizo presencia en los departamentos que eran atravesados por los principales oleoductos del país para ese momento. Desde su fundación, el grupo guerrillero se involucró en la coyuntura que significaba para el Estado la explotación de hidrocarburos, apoyando a los sindicatos y levantamientos realizados en Santander contra las empresas extranjeras que se asentaron en el territorio y se adueñaron de las tierras de los campesinos a precios bajos. Por ello, era previsible su

llegada a nuevos departamentos con el propósito de presentarse ante la población como el defensor del territorio frente a los explotadores extranjeros.

Al mismo tiempo, conforme realizaba extorsiones justificadas bajo el argumento de garantizar seguridad a las compañías que atacaba y extorsionaba, el grupo obtenía financiación mediante secuestros. Esta estrategia tuvo un efecto positivo en su imagen, que podía ser vista como la de un grupo capaz de influir de forma nacional e internacional secuestrando empleados extranjeros, por cuya liberación se debía negociar y pagar grandes sumas de dinero. Los recursos obtenidos eran destinados tanto al fortalecimiento militar como a la provisión de ciertos servicios públicos en las comunidades.

El grupo mostró un interés particular por aquellos municipios que, debido a sus condiciones naturales, permanecían aislados de los centros departamentales. Esto contribuyó a que la gobernanza híbrida fuera

una dinámica más común que la presencia de un gobierno legal. El ELN instrumentalizó dichas zonas, estableciendo corredores estratégicos en áreas montañosas consideradas de difícil acceso y aprovechando tanto las rutas naturales de escape como la legitimación de la población. Esto acentuó el aislamiento en su relación con el gobierno, debilitando las vías formales de comunicación, ya deterioradas por las históricas demandas sociales incumplidas y reprimidas. Además, el grupo explotó la riqueza de sus suelos para la extracción petrolera y minera, y destinó estos espacios para los cultivos ilícitos de marihuana y coca.

8. Conclusiones

I. Las relaciones que estableció el ELN con la población de los territorios vulnerables resultaron determinantes para la perpetuación del conflicto armado. La combinación de una violencia de facto y una violencia simbólica, expresada en la aceptación tácita del control ejercido sobre los recursos, las instituciones y, por lo tanto, la vida en

sociedad, a cambio de la provisión de bienes y servicios básicos que eran responsabilidad del Estado —cuyo interés estaba puesto en responder a disposiciones internacionales y a lineamientos geopolíticos de la Guerra Fría, más que a necesidades internas—, provocó una legitimación coaccionada del proyecto de la organización armada.

II. El poco interés y la falta de recursos de las instituciones para ingresar e invertir en los territorios considerados periféricos debido a la dificultad de acceso tuvieron un impacto negativo directo en la construcción de bases sociales dispuestas a confiar en los proyectos políticos que proponían la paz. La idea de Estado construida históricamente en la sociedad fue la de un ente represor que aprovechó su poder para consolidar una única idea de gobierno. Por ello, transformar este imaginario resultó complejo para dos administraciones que, mientras adelantaban procesos de paz, permitían la consolidación de grupos paramilitares que contribuyeron al recrudecimiento del conflicto armado.

III. El control territorial —entendido como el dominio de los aspectos sociales, políticos y económicos— ejercido por el ELN demuestra la incapacidad del Estado para responder a las necesidades particulares de las regiones colombianas. Aunque la descentralización política buscó solucionar el problema, su aplicación ocurrió en un momento inoportuno y resultó contraproducente debido al poder local ejercido por el ELN, lo que permitió cooptar el único canal de comunicación entre la institucionalidad y los pobladores, quienes, en un escenario distinto, habrían podido canalizar sus demandas y necesidades.

IV. El territorio colombiano es un actor determinante en el conflicto armado colombiano. La extensión territorial, los accidentes geográficos y los suelos cultivables y explotables han sido factores clave para la configuración de relaciones de poder, dinámicas de confrontación y reproducción de condiciones de marginalidad que se presentan de manera diferenciada en cada región. Sin embargo, este factor no fue considerado relevante sino hasta el incremento de las acciones de los grupos armados. Con un

estudio previo de las condiciones territoriales y de las posibilidades económicas diferenciadas, así como con una presencia institucional efectiva, la gobernabilidad habría sido ejercida por un solo actor: el Estado.

V. Cualquier esfuerzo de paz con el ELN debería pensarse y aplicarse de manera local. Por un lado, el trabajo adelantado en cada región fue diferente debido a la naturaleza organizativa del grupo; por otro, aunque las demandas de todas las áreas puedan abordarse de manera general, las necesidades y dinámicas son específicas de cada región. Pensar la gobernanza híbrida en Colombia desde una perspectiva en la que las comunidades sean las encargadas de ejecutar los acuerdos de paz e implementar las instituciones estatales desde su propia interpretación puede constituir un mecanismo de reconciliación y prevención, así como una garantía de no repetición.

Declaración de autoría

El primer autor realizó la supervisión, redacción-revisión y edición.

La segunda autora realizó la validación de datos, redacción-revisión y edición.

La tercera autora hizo la conceptualización, análisis formal, metodología y escritura-borrador original.

La cuarta autora estuvo a cargo de la metodología y escritura-borrador original.

El quinto autor estuvo a cargo de la adquisición de recursos.

Agradecimientos

Este artículo es un resultado del proyecto de investigación INV-EES 3940, financiado por la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Militar Nueva Granada.

Referencias

Amaya, D. (2021): «El frente de guerra Suroccidental: entre el arraigo social y la reconfiguración militar», en A. Aponte y F. Gonzales, eds., *¿Por qué es tan difícil negociar*

con el ELN?, Bogotá, Cinep/PPP, pp. 417–476. Disponible en: https://www.cinep.org.co/publi-files/PDFS/20210301_Por_que_es_tan_dificil_negociar_ELN.pdf

Aponte, A. (2021): «Descifrando al ELN: un federalismo insurgente, génesis y desarrollo de sus constreñimientos organizacionales, 1964–2020», en A. Aponte y F. Gonzales, eds., *¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN?*, Bogotá, Cinep/PPP, pp. 55–198. Disponible en https://www.cinep.org.co/publi-files/PDFS/20210301_Por_que_es_tan_dificil_negociar_ELN.pdf

Barrera, V. (2014): «Las vicisitudes de la integración. Trayectorias de desarrollo y conflicto armado en el Cesar», en F. Gonzales, ed., *Territorio y conflicto en la Costa Caribe*, Bogotá, Odecofi-Cinep, pp. 227–330.

Bejarano, A. (1990): «La paz en la administración Barco: de la rehabilitación social a la negociación política», *Análisis Político*, (9), pp. 7–29. Disponible en: <https://revistas.unal.edu.co/index.php/anpol/article/view/74264>

Boege, V., A. Brown, K. Clements y A. Nolan (2008): «On hybrid political orders and emerging states: state formation in the context of ‘fragility’», Berghoff Research Center for Constructive Conflict Management. Disponible en: https://edoc.vifapol.de/opus/volltexte/2011/2595/pdf/boege_et_al_handbook.pdf

CAJAR (2015): *1985: el mensaje de paz del gobierno no era compartido por las Fuerzas Armadas*, Bogotá, CAJAR. Disponible en: <https://www.colectivodeabogados.org/1985-el-mensaje-de-paz-del-gobierno-no-era-compartido-por-las-fuerzas-armadas/>

Centro Nacional de Memoria Histórica (2018): *Catatumbo: Memorias de Vida y Dignidad*, Bogotá, CNMH. Disponible en: https://centrodememoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2020/01/catatumbo_memorias-de-vida-y-dignidad.pdf

Colombia (1978, septiembre 21): «Decreto 1923/1978, de 6 de septiembre por el cual se dictan normas para la protección de la vida, la honra y bienes de las personas y se garantiza la seguridad de los asociados», *Diario Oficial*, N.º

35101. Disponible en: https://www.redjurista.com/Documents/decreto_1923_de_1978_poder_ejecutivo.aspx#/

Congreso de la República de Colombia. (1981): «Ley 37 de 1981, por la cual se crea el Plan Nacional de Rehabilitación», Diario Oficial. Disponible en: <https://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1593156>

Comisión de la Verdad (2022a): *Hay futuro si hay verdad: Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tomo 3: No matarás: relato histórico del conflicto armado interno en Colombia*, Bogotá, Comisión de la Verdad.

Comisión de la Verdad (2022b): *Hay futuro si hay verdad: Informe Final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Tomo 9: Resistir no es aguantar: violencias y daños contra los pueblos étnicos de Colombia*, Bogotá, Comisión de la Verdad.

Corporación Nuevo Arco Iris, CNAI (2012, mayo 25): *Fronteras calientes: Arauca y el frente Domingo*

Laín (primera parte). Disponible en: <https://arcoiris.com.co/2012/05/fronteras-calientes-arauca-y-el-frente-domingo-lain-primera-parte/>

Echandía, C. (2013): *Auge y declive del Ejército de Liberación Nacional (ELN) Análisis de la evolución militar y territorial de cara a la negociación. Informes FIP N° 21*, Bogotá, Fundación Ideas para la Paz. Disponible en: <https://storage.ideaspaz.org/documents/529debc8a48fa.pdf>

Fonseca, D., O. Gutiérrez y A. Rudovist (2005): *Cultivos de uso ilícito en el sur de Bolívar: Aproximación desde la economía política*, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Disponible en: <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2007/5695.pdf>

Forero, J. y D. Amaya (2021): «El ELN en el sur de Bolívar: La pérdida de un bastión militar», en A. Aponte y F. Gonzales, eds., *¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN?*, Bogotá, Cinep/PPP, pp. 197–258. Disponible en: https://www.cinep.org.co/publi-files/PDFS/20210301_Por_que_es_tan_dificil_negociar_ELN.pdf

Fundación Cultura Democrática FUCUDE, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES, Corporación Opción Legal, Universidad Tecnológica de Bolívar Grupo Regional de Memoria Histórica & Mesa de Organizaciones de Población Desplazada de Los Montes de María OPDS Montes de María (2020): *Los Montes de María bajo fuego, voces de las víctimas de la violencia*, Bogotá, FUNCODE.

Fundación Ideas para la Paz (2013): *Dinámicas del conflicto armado en el Catatumbo y su impacto humanitario*. Boletín N.º 64, Bogotá, Fundación Ideas para la Paz. Disponible en: <https://storage.ideaspaz.org/documents/5b72fe7f2b9d1.pdf>

Fundación Ideas para la Paz (2015): *El ELN y la industria petrolera: ataques a la infraestructura en Arauca*, Bogotá, Fundación Ideas para la Paz. Disponible en: <https://storage.ideaspaz.org/documents/55411b8a3ccab.pdf>

Fundación Ideas para la Paz (2024): «Geografía de las dinámicas de los grupos armados» [en línea]. Disponible en: <https://multimedia.ideaspaz.org/especiales/geografia-dinamicas/index.html>

[consulta: 7 de julio de 2025].

Gobernación de Arauca (2016): «Gobernación de Arauca» [en línea]. Disponible en: <https://arauca.gov.co/generalidades/> [consulta: 7 de julio de 2025].

Grupo de Memoria Histórica (2013): *¡BASTA YA! Colombia: Memorias de guerra y dignidad*, Bogotá, Imprenta Nacional. Disponible en: <https://centrodehistoriahistorica.gov.co/wp-content/uploads/2021/12/1.-Basta-ya-2021-baja.pdf>

Keohane, R y J. Nye (2000): «Governance in a globalizing world», en *Power and Governance in a partially globalized world*, London, Routledge, pp. 193–218. Disponible en: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php/486331/mod_resource/content/0/Robert%20Keohane%20Power%20and%20Governance%20in%20a%20Partially%20Globalized%20World.pdf

López, M. y M. Fuerte (2020): «Hybrid Governance in Northeastern Mexico Crime, Violence, and Legal-Illegal Energy

Markets», *Latin American Perspectives*, 48(1), pp. 103–125. DOI: <https://doi.org/10.1177/0094582X20975016>

Medina, C. (s.f): *ELN Ejército de Liberación Nacional Notas para una historia de las ideas políticas (1958–207)*. Tesis Doctoral, Universidad Nacional de Colombia.

Medina, C. (1997): *Elementos para una historia de las ideas políticas del Ejército de Liberación Nacional. La historia de los primeros tiempos. (1958–1978)*, Bogotá, Rodríguez Quito Editores. Disponible en: <https://www.calameo.com/books/001373409c5e1602dc7d4>

Medina, C. (2014, junio 14): «Arauca, tierra de colonización y conflicto», Agencia UNAL. Disponible en: <https://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/arauca-tierra-de-colonizacion-y-conflicto>

Millán, S. (2011): «Variaciones regionales de la presencia del ELN», en D. Aponte y A. Vargas, eds., *No estamos condenados a la guerra. Hacia una estrategia de cierre del conflicto con el ELN*, Bogotá, Odecofi-Cinep, pp. 111–174. Disponible

en: https://www.cerac.org.co/assets/pdf/LibroCERAC_NoEstamosCondenadosALaGuerra_Completo.pdf

Ministerio de Cultura (2016): *Historia de Colombia y sus oligarquías (1948–2017)*, Bogotá, Ministerio de Cultura. Disponible en: <https://www.bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digitales/historia-de-colombia/libro/index.html#chapters-list>

Ministerio de Trabajo (s. f): *Ficha técnica trabajo infantil departamento de Cauca*, Bogotá, Ministerio de Trabajo. Disponible en: <https://app2.mintrabajo.gov.co/siriti/info/fichas-tecnicas/cauca.pdf>

Peco, M y L. Peral (2006): *El Conflicto de Colombia*, Madrid, Ministerio de Defensa. Disponible en: <https://e-archivo.uc3m.es/rest/api/core/bitstreams/cf887154-ed81-4525-b6c5-9794dc363b1b/content>

Plazas, L. (2017): «Los inicios del Frente Domingo Laín del ELN en Arauca, 1970–1978», *Procesos Históricos*, 31 (16), pp. 4-16. Disponible en: <https://>

www.redalyc.org/journal/200/20049680002/html/#redalyc_20049680002_ref12

Ríos Sierra, J. (2017a): *Breve historia del conflicto armado en Colombia*, Bogotá, Los Libros de la Catarata.

Ríos Sierra, J. (2017b, abril 24): ¿Qué hay del proceso de paz en Colombia con el ELN?, *Foro Económico Mundial*. Disponible en: <https://es.weforum.org/stories/2017/04/que-hay-del-proceso-de-paz-en-colombia-con-el-eln/>

Risse, T. y U. Lehmkuhl (2006): *Governance in Areas of Limited Statehood. New Modes of Governance?*, Berlin, Research Program of the Research Center (SFB). Disponible en: <https://www.files.ethz.ch/isn/44945/2006%20Working%20Paper%201%20-%20English.pdf>

Rodríguez, A. (2005): *La verdad sobre el Ejército de Liberación Nacional eln. Sus orígenes y primeros años*, Bogotá, Editorial Marques.

Vega, R., L. Núñez y A. Pereira (2009): *Petróleo y protesta obrera. La USO y los trabajadores*

petroleros en Colombia en tiempos de Ecopetrol, Bogotá, Corporación Aury Sará Marrugo. Disponible en: <https://aurysara.org/wp-content/uploads/2020/01/Petroleo-y-Protesta-Obrera-2-comprimido.pdf>

Vélez, M. (2001): «FARC-ELN: Evolución y expansión territorial», *Desarrollo y Sociedad*, 1(47), pp. 151–225. Disponible en: <https://revistas.unian-des.edu.co/index.php/dys/article/view/6487>

Verdad Abierta. (2008, marzo 9): «Conflicto armado 1981-1989», *Verdad Abierta*. Disponible en: <https://verdadabierta.com/conflicto-armado-1981-1989/>

Whittingham, M. (2011): «¿Qué es la gobernanza y para qué sirve?», *Revista Análisis Internacional*, (2), pp. 219–236. Disponible en: <https://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/24>